

Dispatches **BOLIVIA COLOMBIA MÉXICO PALESTINE PARAGUAY TURKEY UNITED KINGDOM**



Carmen Beatriz Ruiz

BOLIVIA

Defensoría del Pueblo en Bolivia: el reto de la institucionalización

Desde hace ya varios meses, la Asamblea Legislativa de Bolivia está debatiendo, sin ponerse de acuerdo, la elección del o la titular de la Defensoría del Pueblo. Las bancadas del oficialismo y la oposición se encuentran enfrentadas desde el inicio del proceso, no sólo por las candidaturas, sino también por el procedimiento, pese a que éste está establecido en la Constitución y la Ley 870 (diciembre 2016). Respondieron a la convocatoria 198 postulantes. Una vez realizada la depuración de datos quedaron siete. La normativa establece que la persona titular debe ser elegida por dos tercios (2/3). Lo que suma 109 votos. Hasta la fecha ninguno de los tres postulantes más votados logró ese puntaje.

Con algunas diferencias de fondo y forma, ocurrieron hechos semejantes a lo largo de las casi tres décadas que la institución fue implantada en otros países de la región: embates del partido oficialista para copar los nombramientos, desacuerdo entre el oficialismo y la oposición, retrasos de hasta años en la designación, ciclos enteros con interinatos, recortes presupuestarios paralizantes, confrontaciones políticas, desobediencia sistemática a las recomendaciones, acoso a través de diversos medios de comunicación y de fiscalización, etc.

Sin embargo, las instituciones nacionales de derechos humanos (que asumen distintos nombres como Defensoría del Pueblo, Procuraduría de los Derechos Humanos o Comisión de Derechos Humanos) siguen de pie y trabajando, principalmente porque su existencia y funciones están establecidas en las Constituciones y en muchos casos cuentan con leyes específicas, y aún más importante, porque la población continúa acudiendo a ellas en medio de sus necesidades y desamparo por diferentes causas.

Las instituciones de defensa de los derechos humanos forman parte de la recuperación de la democracia en América Latina y de la modernización de sus Estados, ya "que permiten la canalización de los planteamientos y opiniones acerca del funcionamiento del sector público y exigen, además, el respeto efectivo de los derechos e intereses de los habitantes" (*Los ombudsmans en América Latina y su incidencia política*. Lorena González, 2009). De ahí la importancia de su institucionalización, solidez y capacidad de respuesta ante las demandas ciudadanas.

Los Principios relativos al estatuto de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos [Principios de París](#), orientan instituciones como la Defensoría del Pueblo y requieren que éstas mantengan su independencia y una composición que asegure la representación pluralista de las fuerzas sociales en el país.

El desafío de la institucionalidad comprende contar con un presupuesto suficiente y la independencia de partidos políticos y del poder ejecutivo. Al no cumplirse estas condiciones se daña su credibilidad, la solvencia y autoridad para investigar, emitir resoluciones y actuar en situaciones de conflicto. Pierde la sociedad y, como siempre, la población más desamparada.

COLOMBIA

Francia Márquez: una transgresión a la política tradicional colombiana



Paola Jiménez

Las elecciones colombianas para el periodo 2022-2026 han sido atípicas en varios sentidos. Es la primera vez que una candidatura abiertamente progresista, y apoyada por diversos sectores de izquierda lidera las encuestas y triunfa en segunda vuelta. En este contexto, el amplio apoyo que recibió la vicepresidenta electa, Francia Márquez, aparece como un fenómeno disruptivo e innovador. Se trata de una mujer afrocolombiana reconocida por su liderazgo en temas ambientales y originaria de una de las zonas más azotadas por el conflicto armado. Márquez, además, se reclama feminista y defensora de derechos humanos.

En un país en el que la estigmatización de la lucha por los derechos de las mujeres ha sido utilizada como herramienta electoral (como sucedió en el plebiscito para reafirmar los acuerdos de paz), reivindicar abiertamente una posición feminista tiene un fuerte peso simbólico. De hecho, sus propuestas por la defensa de las mujeres permitieron que sectores activistas que veían con desconfianza el proyecto político del candidato Gustavo Petro y su plataforma política se unieran con entusiasmo a la campaña electoral.

Un aspecto que tampoco debe pasarse por alto es la representatividad que Francia Márquez provee a la comunidad afrocolombiana, históricamente relegada, vulnerada y racializada. No es de poca importancia que después de llevarse una masiva votación en las primarias de marzo pasado y postularse para vicepresidenta, el resto de los candidatos integraran a sus respectivas campañas el llamado de una ciudadanía ávida de inclusión. Como resultado, [cinco candidaturas a la presidencia contaron con una fórmula vicepresidencial que representa a los sectores afrocolombianos](#), algo inédito en la política colombiana.

Finalmente, más allá del resultado de las elecciones, el mensaje que contiene la victoria de Márquez y el entusiasmo que despierta en su electorado aún pueden resumirse en el reclamo de la Colombia periférica a la que las élites en Bogotá han relegado durante toda la historia republicana. Por lo tanto, la discusión ya no debe versar sobre su fuerza electoral, sino preguntarse si el sistema democrático colombiano está en la capacidad de honrar los principios constitucionales del antirracismo, igualdad e inclusión.



y Sergio Rodríguez

MÉXICO

El país de las personas desaparecidas

En México las personas están desapareciendo y no por arte de magia, si fuera así al menos tendríamos la certeza de que volveríamos a verles, pero este no es el caso. Desde 1964 cuando empezó el conteo hasta el lunes pasado han [desaparecido en México más de 100.000 personas](#), lo cual representa una crisis de derechos humanos grave que no parece detenerse.

La cifra es bastante dolorosa porque se trata de mujeres, niñas, niños y hombres inocentes, personas en situación de movilidad que buscaban mejores oportunidades y que lo único que encontraron fueron fosas comunes. También duele porque la responsabilidad no solo recae en el crimen organizado, El Estado – la institución encargada de garantizar la seguridad de las y los mexicanos – es presunto responsable de algunas de estas desapariciones. Pero lo que más duele es la normalización, a muchas personas ya no se les eriza la piel al escuchar la cifra y esto es bien preocupante.

El pasado 10 de mayo se celebró en México el Día de la Madre, un día para festejar la capacidad de dar y proteger la vida. Sin embargo, desde hace algunos años en esta fecha las madres de hijas e hijos desaparecidos salen a las calles a reclamar justicia. Se protesta por la indiferencia de las autoridades que ya están rebasadas, por su incapacidad e ineficiencia ante el uso de protocolos para las búsquedas, por la revictimización que sufren al reportar a un familiar desaparecido. También se protesta por la frustración de no haber pedido ayuda porque la desconfianza y el miedo fueron más fuertes. A ello hay que sumarle las largas jornadas de búsquedas que las familias de las víctimas realizan en forma de colectivos en los predios baldíos, en los basureros públicos, en las periferias de las ciudades, además de las largas visitas a los centros forenses que carecen de tecnología oportuna para identificar personas rápidamente.



José Miguel López

En noviembre del año pasado el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU visitó México e hizo una [serie de recomendaciones para poder prevenir y erradicar el problema](#). En su informe resalta la necesidad de fortalecer a las instituciones que realizan las investigaciones de búsqueda y su coordinación, resolver la crisis forense, facilitar la judicialización de casos de desaparición forzada, facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferenciado, brindar protección a las víctimas y a los servidores públicos investigadores, entre otras.

Sin embargo, estas son soluciones coyunturales puesto que lamentablemente el centro de atención son las búsquedas y no la prevención de las desapariciones. En cuanto a las respuestas estructurales... parece que estas sí se espera que aparezcan como por arte de magia.

Nadie debería desaparecer, nadie debería tener temor de salir a la calle y ya no regresar. Lo que está pasando en México no solo es una crisis de desapariciones, es una crisis de humanismo y de allí es más difícil volver.

PALESTINE

The Murder of Shireen Abu Akleh

Rania Zabaneh

A 5.56mm armor piercing bullet fired from a 14 mini-Ruger rifle, often used by Israeli snipers, hit the back of Shireen Abu Akleh's head as she was trying to duck and escape gunfire.

The Al Jazeera veteran correspondent was clearly marked as a member of the press, with a protective vest and a helmet. She walked with several other journalists in an open street, where an Israeli military vehicle was stationed, and a sniper was positioned around 200 meters away. The area was relatively quiet, up until gunshots were fired from the Israeli direction towards the journalists. The gunshots continued, even after Abu Akleh fell wounded to the ground.

According to witnesses, Abu Akleh was shot dead in a targeted attack by Israeli forces while covering an Israeli military raid on the Jenin refugee camp in the northern occupied West Bank on 11 May 2022. [Media investigations](#), and audio and video evidence confirmed that there were no Palestinian militants close to the journalists and that the shot came from the direction of Israeli soldiers. ["The number of strike marks on the tree where Shireen was standing proves this was not a random shot, she was targeted."](#)

A Palestinian Authority (PA) probe also concluded Abu Akleh was intentionally killed. [The Palestinian Authority and the International Federation of Journalists and other human rights organizations](#) have submitted complaints to the International Criminal Court (ICC) with regard to the journalist's murder. This follows an earlier complaint to the ICC on systematic violence against journalists and media infrastructure.

In the first two weeks following her killing, the Israeli response to the events changed several times. Israel blamed Palestinian gunmen for Abu Akleh's death, noted that the journalists were ["armed with cameras,"](#) claimed it did not have sufficient information to determine the source of fire, and rejected an investigation as there was no suspicion of a criminal act. Israel's shifting narrative has been documented by various news outlets, [including Israeli media](#). In the past 22 years, [32 journalists](#) have been killed while working in the occupied Palestinian territory, according to Reporters Without Borders. The Israeli army has never acknowledged responsibility.

The Palestinian Center for Development and Media Freedom documented 562 violations against media in 2021. While the majority of those incidents were committed by the Israeli forces, including killing, physical assaults, arrests or preventing journalists from covering events, the Palestinian authorities in the occupied West Bank and besieged Gaza, were responsible for nearly a quarter of the violations.

Both physical and virtual space for Palestinians is shrinking. Palestinians live in constant fear of losing – their lives, loved ones, homes, lands, time, security... and faith in a better tomorrow. It's the undetected invisible violence that often dictates the lives of Palestinians under occupation: checkpoints control when a Palestinian moves from one place to another and which road to take, the separation wall controls which crops farmers grow, permits control which hospital can treat a sick individual, and Israeli authorities also determine who a Palestinian can fall in love with.

Due to the increased oppression more Palestinians have been steering away from speaking out about their daily reality under occupation, not only because they fear Israeli persecution or retaliation, but also because they have lost hope in the world's interest to bring about change.



Carmen Colazo

PARAGUAY

Paraguay droga y banana¹

Paraguay, un país caracterizado por sus propios habitantes como “una isla rodeada de tierra”, ha vivido, históricamente, diversas dictaduras; desde la del Dictador Supremo de la República Dr. Gaspar Rodríguez de Francia –tan bien retratado en *YO El Supremo*, la célebre obra del mayor escritor del país Augusto Roa Bastos– hasta la última dictadura de más de 35 años del Gral. Alfredo Stroessner Matiauda, quien fue derrocado por un golpe militar de su propio consuegro, el también Gral. Andrés Rodríguez, el 3 de febrero de 1989. Esta historia de dictaduras, de poder patriarcal, vertical, poco deliberativo, poco democrático, era la principal preocupación de la clase política hasta los años noventa, cuando comienza la transición a la democracia. Esta se va consolidando gracias a la redacción de una nueva Constitución en 1992 –la que llega a nuestros días– y que define al país como un “Estado social de derecho” y una “democracia representativa, participativa y pluralista” (Artículo 1, Constitución paraguaya de 1992). Paraguay estuvo encerrado al mundo, recién en estos últimos decenios se convirtió en un país “globalizado”.

Pero un paraguayo o una paraguaya nunca pensaron que sus preocupaciones por las violencias heredadas de la dictadura, la conexión con el tráfico de droga de sus propios máximos generales, o el contrabando permitido por el propio Estados Unidos dentro de la Guerra Fría mientras se pusiera un muro al ingreso del comunismo al Cono Sur, hoy derivarían en la acción cada vez más cruenta, descarnada y mercantilista del crimen organizado, una red mundial con efectos locales desequilibrantes dentro del contexto nacional.

Si bien Stroessner tuvo bandera blanca para traficar mientras combatiera el comunismo, y su propio consuegro, el Gral. Rodríguez, fuera sindicado como uno de los hombres más ricos de América por estar ligado al narcotráfico, el crimen organizado operaba sujeto de la mano de políticos o militares más que de los propios mafiosos o delincuentes; pero, desde hace unos años, los políticos cedieron paso a los patrones de la droga, del contrabando, de la trata y otras lacras, quienes fueron ocupando lugares de decisión política con altos cargos en el Estado. Esta realidad demolió la institucionalidad democrática lograda y la gobernabilidad democrática post 1989, fue generando también una economía informal dentro del sistema formal y un mando informal dentro del mando formal del Estado. El “sicariato”-Asesinatos en manos de sicarios- se convirtió en una nueva figura de acción pública naturalizada y las muertes por los carteles del crimen organizado, el pan nuestro de cada día.

Hoy Paraguay asiste a la [muerte de uno de sus fiscales más destacados, el Dr. Marcelo Pecci](#), Fiscal dedicado a las más duras causas contra el narcotráfico y lavado de dinero, quien, en su luna de miel y disfrutando de la noticia de ser incipiente padre, fue acibillado a balazos en la península de Barú en Cartagena, Colombia. Este crimen dejó un claro mensaje a la clase dirigente, y sobre todo a quienes toman decisiones, sobre no [perseguir al crimen organizado o la pagarán con su vida](#).

La encrucijada nacional es: retomar la causa nacional, apoyarse en la ciudadanía activa y oponerse con el voto y con la oposición firme en todos los ámbitos (político, económico, social, cultural) a esta realidad, sin miedo, o ser súbditos de esta otra forma de dictadura que asola a Latinoamérica.

Las *narcodictaduras* eliminan todas las libertades, derechos y garantías con efectos específicos y perversos sobre los derechos de las mujeres y las niñas, víctimas principales del patriarcado, que, en la cultura “narco” tiene su más criminal y degradada expresión.

¹ Título de un importante documental sobre Paraguay producido, escrito y dirigido por el periodista Juan Manuel Salinas.



Zeynep Baser

TURKEY

Turkey becomes Türkiye

On Thursday, 2nd of June, the United Nations approved the petition of Turkey's Foreign Minister to modify the country's name to Türkiye. He said this change would "increase our country's brand value". Amid the worst economic crisis in the last 20 years, with almost a 70% inflation rate in April 2022, President Erdogan's move can be understood in political terms, especially considering that the 2023 general election is approaching and [the support for the ruling AK party has declined in recent years](#).

The defeat of the AK Party in the municipal elections of 2019 in five of the country's six largest cities, including Istanbul and Ankara, [marked the first loss for the AK Party and its leader since 2003](#). In the current situation, where the government seems incapable of solving the country's economic crisis that started in 2018, populist initiatives like "re-branding" the country's name may seem like a short-term win for a political project that has lost support.

Changing the country's name is only one of the recent attempts to preserve support among nationalist and conservative sectors and the AK's parliamentary coalition. Other decisions to consolidate traditional and Islamic-centered policies include withdrawal from the Istanbul Convention, limiting alcohol spending in the country and the reconversion of the status of the Hagia Sophia Museum. Initially built in the 6th century as an Orthodox Christian cathedral, [the Hagia Sophia was converted into a mosque in 1453 after the fall of Constantinople](#). It was transformed in 1935 into a museum under the secular Republic, and again in 2020 when [the Turkish government designated it as a mosque](#). Nonetheless, the effects of the international name change on the electorate remain unknown, considering that [inflation and unemployment are the top priorities for Turkish citizens](#).



Yulye Jessica
Romo Ramos
Director and Founder
of Nexus Evaluation Ltd.

UNITED KINGDOM

Diversity, Equity and Inclusion: A UK-based Perspective

Nexus recently conducted a review as part of an evaluation and found that systemic issues get in the way of creating a fair, diverse, inclusive and equal society (DEI). Systemic racism and discrimination bias is embedded in practices and policies that structure operations, industries, economies and mindsets - constructing whiteness as a valued commodity, a site of superiority and unquestioned moral authority, according to the Human Rights Council in its publication "[Covid-19, systemic racism and global protests](#)". These systemic practices lead to institutional racism and discrimination of Black and minoritized people, groups and community-led organisations - this includes people of African, Caribbean, South Asian, East Asian, Latin, Middle Eastern, Eastern European and all mixed heritage that are regarded an ethnic minority in the UK.

The latest [survey on minorities and discrimination](#) report shows that UK respondents have felt discriminated against because of skin colour, ethnic origin or religion in 10 areas of life (including when looking for work, at work, when looking for housing, when using health services, when entering shops, when using public transport, etc.). Yet, over 80% of respondents chose not to file a complaint, with the most common reasons being 1) a belief that nothing will happen or change, 2) that it was too trivial or not worth reporting and, 3) it is a long and costly legal process, or they had insufficient proof. This reflects a widespread culture of underreporting, which results in a lack of disaggregated data and ultimately, impunity.

DEI issues are human rights issues. Therefore, it's worrisome that reports from specialised UN agencies, rapporteurs and international committees generally depict the United Kingdom as a country with decreasing levels of human rights protection. But it is also about public leaders being over-stretched and under-supported in the participatory design [of services](#) with marginalised communities, outdated governance models and a lack of accountability.

DEI is a journey that starts with self-awareness and diagnosis that should lead to a commitment to act, and to making structural changes until DEI becomes the new business model. However, most organisations are struggling to change power structures and leadership behaviours that get in the way of DEI. Organisations try to deal with DEI on their own, as part of an internal process led by senior executives - yet independent expert support, as well as meaningful engagement of those historically discriminated and marginalised, are needed to create transformative and long-term change.

Opinion

QUESTIONS FROM JGG | ANSWERS BY DR. SEEMA SHAH



Dr. Seema Shah— is the Head of International IDEA's Democracy Assessment (DA) Unit, which produces a biennial 'Global State of Democracy' report, an annually updated Global State of Democracy Indices and a EU-co-funded Covid-19 Global Monitor on Democracy and Human Rights.

JGG: Based on your research, what are the drivers of the decline in democracy and rise in authoritarian measures?

Dr. Seema Shah: It is no secret that democracy is in decline around the world. While people continue to support the idea of democracy, they are less than satisfied with the performance of individual democratic regimes. This comes as little surprise; International IDEA's latest data show that the number of backsliding democracies has never been as high as in the last decade, and even the most long-standing democracies are suffering. In fact, the United States and three EU countries (Poland, Hungary and Slovenia) are amongst those suffering from the hallmarks of backsliding: an assault on civil liberties and checks on government. At the same time, authoritarianism is on the rise, with leaders using ever more blatant tactics to achieve their ends. International IDEA's data show that as of 2020, the number of countries moving toward authoritarianism is three times the number moving towards democracy.

The Covid-19 pandemic laid bare some of the most critical vulnerabilities around the world, in democracies and non-democracies alike. Women, minorities and marginalized groups suffered disproportionately, with less access to health care and vaccines and higher mortality rates. They also suffered the worst economic impacts, as lockdowns severely impacted already vulnerable groups who work in the informal sector. This inequality was reflected at the global level, illustrated by wealthier countries hoarding vaccine supplies, resulting in a lack of widespread access for developing nations. This occurred in the context of longstanding, unresolved broader inequalities that foster doubt about if and how democracies can deliver for *everyone*. Indeed, enduring inequality is a main driver in the decline of democracy.

Increasing levels of polarization also threaten the legitimacy of the democratic model. Echo chambers, reinforced by a reliance on social

media, the declining existence of local news and the decreasing popularity of mainstream news outlets, degrade the sense that everyone shares a basic common ground. Without that basic commonality, society fractures at a fundamental level; debate and dialogue become challenging and inter-group mistrust and hostility make it difficult to achieve compromise and consensus. This situation is made worse by the degree to which unregulated, for-profit companies control narratives and access to news and by the large and often unregulated flows of money into elections and other political institutions.

JGG: What key strategies have been implemented by pro-democracy actors implement to strengthen institutions and counter rising authoritarianism?

Dr. Seema Shah: In different countries there is a sense that many of the institutions of democracies are outdated. Some experts argue that traditional political parties have lost their appeal, especially among the youth. While people do want to participate, they do not always wish to do so through parties or elections. The rise of informal civil society, characterized by fluid and non-hierarchical groups who come together for a cause and disband thereafter, as well as the increasing popularity of citizens' assemblies and a revival of interest in sortition, all serve as evidence that mechanisms of participation are changing. In addition, the globalized and increasingly mobile world, especially as the intensity of the Covid-19 pandemic wanes, requires fresh thinking about what concepts like citizenship and sovereignty mean and how to make them reflect the new reality.

Going forward, it is essential that leaders and citizens come together to talk about what democracy means to them and what they aspire to achieve through the growth and renovation of democratic institutions. Democracy must come back to the people, who are the only ones with the power to reshape it to best fit the evolving needs and priorities of our era.

Opinión

PREGUNTAS DE JGG | RESPUESTAS DE CHRISTOPHER HERNÁNDEZ-ROY



Christopher Hernández-Roy — ha venido trabajando en gobernabilidad democrática, derechos humanos, resolución de conflictos, seguridad ciudadana y otros temas de política pública en América Latina y el Caribe por más de 25 años. Recientemente cofundó Rights, Democracy and Development International, LLC, (RD²I), una firma de consultoría que se enfoca en soluciones prácticas sobre gobernabilidad democrática, justicia social y desarrollo integral para mejorar la calidad de vida en los países en vías de desarrollo.

JGG: ¿En América Latina, qué amenazas a la democracia y a los derechos humanos están surgiendo?

Christopher Hernández-Roy: Tuve el privilegio de ser una de las muchas personas que trabajaron en la preparación de la Cumbre de las Américas celebrada en la ciudad de Quebec en 2001. De esa cumbre surgió una “cláusula democrática”, así como la Carta Democrática Interamericana donde se declaró que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. La cumbre de Quebec marcó el punto más alto para la democracia en el hemisferio. La Cumbre que se celebró a partir del 6 de junio de 2022 en Los Ángeles, no podría ser más diferente. Los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua han sido excluidos por liderar regímenes autoritarios que violan las normas democráticas y los derechos humanos. Los presidentes de algunos otros países fueron invitados incómodos para sus anfitriones estadounidenses porque también ostentan selectivamente las normas democráticas.

¿Cómo pasó la democracia desde su aparente cénit en 2001, al lamentable estado de cosas actual? Primero, existen problemas estructurales que todos los países de la región comparten en mayor o menor grado. Estos incluyen instituciones débiles, altos niveles de desigualdad y exclusión social y polarización política que tienen dos impactos. En primer lugar, algunos políticos y/o autoridades a través de actos corruptos, puedan tomar acciones antidemocráticas y abusar los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. En segundo lugar, estas debilidades hacen que grandes segmentos de la población de la región sientan que la democracia no les está funcionando. Según el informe de Latinobarómetro de 2021, el apoyo a la democracia en América Latina cayó del 63 % al 48 % entre 2010 y 2018.

Segundo, hay una fuerte escisión ideológica que se tradujo en prácticas antidemocráticas y restricciones a derechos que se extendieron en varios países con gobiernos de izquierda y, eventualmente, también algunos de derecha. La confrontación ideológica surgió de un estilo de gobierno populista, que se nutrió de la sensación de los ciudadanos de que la democracia y las elites no les estaba dando resultado. Gobiernos con tendencias autoritarias eliminan la separación de poderes, censuran la libre expresión y atacan a periodistas, restringen las garantías judiciales, criminalizan a opositores, detienen arbitrariamente y hasta los hacen desaparecer.

JGG: ¿Qué se debe hacer para contrarrestar las amenazas a la democracia?

Christopher Hernández-Roy: A pesar de estas tendencias autoritarias en la región, “la democracia en América Latina se mantiene estable dentro de su estado de malestar”, según el informe Latinobarómetro 2021. Sin embargo, está claro que los gobiernos no han estado a la altura de las expectativas de los ciudadanos para garantizar sus derechos a vivir con dignidad o libertad, como simbolizan las protestas masivas en Ecuador, Colombia y Chile en 2019, y las protestas de 2021 en Cuba.

Los gobiernos de la región deben redoblar sus esfuerzos para atender las demandas políticas, sociales y económicas abordando de esa manera los desafíos estructurales de la democracia. Tienen que invertir, promover y defender la democracia, como lo demanda la Carta Democrática.

Además, tendrán que rendir cuentas, no solo ante una ciudadanía cada vez más activa, sino por un ecosistema enérgico y vocífero de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, sindicatos, defensores de los derechos humanos y otros activistas que creen que “los Pueblos de América tienen derecho a la democracia” y a todos los beneficios que ésta debe traer.

Knowledge Sharing

ROUNDTABLE: “GENDER IMPACTS OF CLIMATE CHANGE”




On February 10th, 2022 JGG held a roundtable on gender and climate change. Shaila Shahid, Chief Operating Officer (COO) of the Disaster and Climate Change Support Unit (DCCSU), Government of Bangladesh and Adenike Oladosu, a youth activist from Nigeria, presented their experiences related to climate change impacts and actions from a gender perspective. The discussion with attendees focused on gender equality and intersectionality as important factors to achieve climate justice. Please see the recording here: [Gender impacts of Climate Change](#).

CO-PRAXIS

In May JGG published its 13th edition of [Co-Praxis](#). This publication synthesizes research and JGG network consultants’ practical experience in relation to Theory-Based Evaluation. The bulletin summarizes when to use TBE, as well as the challenges that this approach represents in evaluations.

Discussion

Questions for Discussion: Co-Praxis

-  In your experience, what types of projects or programmes are best suited to Theory-Based Evaluation?
-  What are the main conceptual approaches you have used while applying a Theory-Based Evaluation?
-  What tools and methods have you used when applying a Theory Based-Evaluation?

Consultancies

INCLUSIVE GOVERNANCE PROGRAMMING IN MYANMAR

JGG continues to provide monitoring and technical advisory services to Global Affairs Canada on its Inclusive Governance programming in Myanmar. This work includes tracking the armed violence between the military and armed opposition forces and the effects of violence, and the coup generally, on civilians, especially women, ethnic groups, and LGBTI individuals. It also involves external monitoring of a project on federalism and gender equality and facilitating communication among project implementers to promote knowledge sharing and aid effectiveness.

SUPPORT TO UN AGENCIES

Kimberly Inksater, JGG Executive Director, is providing advice to different UN agencies in Southeast Asian countries with regard to international human rights standards related to gender equality, especially with regard to gender-based violence against women. These consultancies involve the review of legislation, online training, coaching and/or research and analysis. Recently, JGG consultants have also supported strategic planning related to violence against children in Latin America and the Caribbean and an evaluation on access to justice.

FORUM OF FEDERATIONS

JGG consultant Anamaria Golemac Powell is supporting the Forum of Federations to conduct a Gender Audit of the House of Federation in Ethiopia. Anamaria and a national consultant are applying the ILO gender audit methodology to identify gaps, challenges and opportunities in the House in terms of gender equality mainstreaming, organizationally and politically, in its institutional structure, policies and procedures.

NETWORK OF CONSULTANTS

Jessica Romo, a consultant affiliated with the JGG network, is working on different projects such as: 1) An evaluation of an innovative fund in the UK, with focus on systemic issues linked to social justice and diversity, equity and inclusion (DEI); 2) MEAL strategy and system development for Panorama, a global partnership of multi-lateral international organizations, focused on conservation and sustainable development; and 3) Events and training for the UK evaluation society, part of an effort to expand and diversify the range of professional development courses on offer.

Announcement

JGG needs consultants in specific governance sub-sectors

If you have technical experience in the following areas, please send your CV to info@justgovernancegroup.org:

- » Anti-corruption;
- » Human rights and gender impacts of climate change and/or aspects of disaster risk reduction.

We especially welcome CVs from consultants with experience in MENA, Asia Pacific, South East Asia and Africa.

JGG Ottawa Office

The Ottawa office of JGG acts as a hub for the JGG network.

The Ottawa office of JGG acts as a hub for the JGG network.

- » To support JGG's consulting and knowledge cycle ("practice - learn - share") a second junior consultants/project officer has been recruited for the summer period. **Sergio Rodriguez** recently graduated with his Master of Arts in International Development and Globalization from the University of Ottawa.
- » To support JGG administration, **Liisa Plitz** has joined the office team on a part-time basis.

CONTACT INFORMATION

Kimberly Inksater, Director: kj.inksater@justgovernancegroup.org
 Ana Laura Zarco, Staff Consultant: consultant@justgovernancegroup.org
 Skype: JustGovernanceGroup
 LinkedIn: Just Governance Group
 Tel: +1-613-729-5612
info@justgovernancegroup.org

